

SESIONES ORDINARIAS

2011

ORDEN DEL DÍA N° 1950

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

Impreso el día 2 de marzo de 2011

Término del artículo 113: 15 de marzo de 2011

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la Secretaría de Energía, a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, en el examen referente al Gas licuado - Gestión y otras cuestiones conexas.

1. (8.674-D.-2010.)

2. (5-O.V.-2008.)

I. **Dictamen de mayoría.**

II. **Dictamen de minoría.**

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-5/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre un informe de auditoría, realizado en el ámbito de la Secretaría de Energía, referida a Gas licuado - Gestión; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la Secretaría de Energía, a fin de: a) regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen referente a Gas licuado - Gestión; b) determinar el perjuicio fiscal que pudiera haber emergido de las aludidas situaciones; y c) determinar y efectivizar las correspondientes responsabilidades.

2. Comunicar el presente dictamen a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para su conocimiento y a los efectos que determine su competencia.

3. Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.

Heriberto A. Martínez Oddone. – Luis A. Juez. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – Walter A. Agosto.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-5/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre un informe de auditoría, realizado en el ámbito de la Secretaría de Energía, referida a Gas licuado - Gestión; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la Secretaría de Energía, a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen referente a Gas licuado - Gestión.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.

Nicolás A. Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.

FUNDAMENTOS

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que realizó una auditoría en el ámbito de la Secretaría de Energía (S.E.) referida a Gas licuado - Gestión de la S.E. en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 26.020 en lo relativo a: *a)* ejercicio del poder reglamentario; *b)* implementación de lo establecido en la ley respecto a los sujetos del sistema; *c)* tareas de fiscalización y control; *d)* recaudación de la tasa de fiscalización y control creada por el artículo 39 de la ley.

El período auditado abarca desde abril de 2005 hasta abril de 2006 (determinado desde el mes de promulgación parcial de la ley 26.020). Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas en el período comprendido entre el 20 de junio de 2006 y el 30 de noviembre de 2006.

El proyecto de informe de auditoría fue enviado en vista al organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta para elaborar el informe definitivo.

Aclaraciones previas

En las aclaraciones previas se detalla el marco legal, los objetivos y el plazo de reglamentación de la ley 26.020 promulgada parcialmente el 8 de abril de 2005 (decreto 297/05) por medio de la cual se establece un nuevo marco regulatorio para la producción y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP). El objetivo es asegurar el suministro regular, confiable y económico del gas, a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con un servicio de gas natural por redes.

Asimismo, se realiza un detalle de la autoridad de aplicación y el organismo de fiscalización; los recursos; los sujetos del sistema de GLP (artículo 2°, ley 26.020); la actividad; la obligaciones y responsabilidades de los sujetos activos (productor, fraccionador, comercializadores, almacenadores, gran consumidor, centro de canje); Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP; controles; régimen sancionatorio y precios de referencia.

El trabajo de auditoría realizado por la AGN dio lugar a las siguientes observaciones:

1. La reglamentación parcial del régimen regulatorio hace inoperativos aspectos relevantes de la ley, tales como el sancionatorio, el sistema de acceso abierto

para la actividad de almacenaje y la contratación de seguros obligatorios en cada etapa de la comercialización.

La ley 26.020 regula actividades declaradas de interés público y su principal objetivo es asegurar el suministro regular, confiable y económico del gas a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.

La AGN informa que si bien esta ley otorga al Poder Ejecutivo nacional un plazo de 90 días contados a partir de su entrada en vigencia para que proceda a la reglamentación, a la fecha de cierre de las tareas de campo de la AGN, dicha obligación no había sido cumplida.

Se encuentran pendientes de reglamentación los siguientes aspectos relevantes:

a) Régimen sancionatorio: actualmente rige la resolución SSC 154/95, la cual no contempla la totalidad de los sujetos que integran los segmentos de la actividad (sólo prevé sanciones para fraccionadores y almacenadores).

b) Acceso abierto para la actividad de almacenaje: pendiente de reglamentación. Mediante este sistema se procuraba la mejor operación de la industria mediante el libre acceso a terceros al mercado en un marco de igualdad de oportunidades.

c) Gran consumidor: si bien la resolución 136/2003 determina el nivel de volumen a partir del cual el consumidor es calificado como gran consumidor, el artículo 32 de la ley 26.020 expresa que la autoridad de aplicación establecerá dicho volumen, sin que se emitieran actos de adecuación o ratificación de las normas, conforme lo establecido en la citada ley.

d) Seguro obligatorio: no se reglamentó este aspecto previsto en el artículo 37 de la ley 26.020, para cada etapa de la comercialización.

2. No se encuentra implementado el fondo fiduciario creado por la ley 26.020, para asegurar a usuarios de bajos recursos el suministro de gas y la expansión del servicio a zonas no cubiertas por redes de gas natural.

El fondo tiene por finalidad atender el consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural.

Ante la falta de implementación del mismo se renuevan los acuerdos de estabilidad de precios para envases de 10kg.

La AGN informa que al no haber adherido todas las provincias al sistema de control de los precios de referencia, el control de los mismos no se extiende de modo uniforme a todo el país. En consecuencia, el sector de usuarios de bajos recursos de las provincias no adheridas podría no tener asegurado el acceso al hidrocarburo. (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre

Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán).

Las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco están íntegramente no servidas por redes de gas natural.

Esta situación genera una fuerte asimetría de precios entre los consumidores de gas natural y de gas licuado de petróleo.

3. La S.E. no ha alcanzado la totalidad de las metas propuestas en el Plan de Gestión 2005 en el contexto de la ley 26.020.

El Plan de Gestión 2005 forma parte de la resolución SE 1.073/05, donde se prevé reorganizar y fortalecer la Dirección Nacional de Gas Licuado de Petróleo (DN-GLP), adaptándola a las nuevas obligaciones que derivan del marco regulatorio de la industria del GLP.

El Plan de Gestión 2006 no ha sido formalmente aprobado, y los objetivos no alcanzados durante el año 2005 fueron contemplados en el plan 2006.

Entre las tareas encomendadas por el nuevo marco regulatorio, que no ha llevado a cabo la autoridad de aplicación, se detallan:

a) Garantizar el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios, los cuales a la fecha de cierre de las tareas de campo no se encontraron implementados.

b) Acordar con las autoridades nacionales y provinciales de defensa del consumidor políticas de contralor para el seguimiento de los precios de referencia.

Existen 12 jurisdicciones (Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán) que no han adherido al control de precios propuesto por la S.E.

Se elaboró una nota invitando a las restantes provincias a suscribir el acta acuerdo correspondiente, la cual a la fecha de cierre de las tareas de campo, no ha sido signada por el secretario de Energía.

c) Creación, puesta en marcha y administración de un registro de envases de GLP.

Debido a los altos costos de fabricación, es muy poca la cantidad de envases que se fabrica, así como también la que se destruye.

En el mercado existen más de 20.000.000 de envases, aunque los datos registrados por la autoridad, respecto del número de envases existentes en el mercado, presentan inconsistencias.

La DNGLP, lleva un registro de marcas, leyendas y envases, utilizando el programa Excel. Esta base no permite el seguimiento y/o trazabilidad de los envases existentes en el mercado. Al respecto, la AGN observó que el mismo resulta incompleto, no se constataron medidas de seguridad, alertas de vencimientos ni claves de acceso; la base de datos no permite vincular los registros con los documentos que respaldan la operación

que se asienta (altas, bajas y transferencias de leyendas y/o marca) y no todos los registros de la base de datos tienen el correspondiente certificado de las auditoras de seguridad que documente la operación. Asimismo, la AGN advierte que no se registran las operaciones históricas, es decir la base sólo permite identificar al titular actual, y existe un gran número de leyendas y/o marca (sobrerrelieve o placa) sin identificación.

d) Establecer mecanismos de transferencia transparentes del producto entre sus distintas etapas, y establecer limitaciones de participación de mercado a fin de evitar la concentración (artículo 10 de la ley 26.020)

Esta meta se ha llevado a cabo parcialmente mediante el dictado de la resolución SE 811/06, la cual sólo regulariza el parque de cilindros de 45 kg de capacidad mediante un plan nacional de normalización de dicho parque, un programa de acondicionamiento integral de los cilindros y la conformación de un parque transitorio de uso común.

e) Implementación de un sistema inteligente para asegurar la trazabilidad de los envases.

Los envases de GLP están sujetos a un tráfico intenso que afecta con el tiempo su integridad.

La autoridad de aplicación ha considerado, además del registro de envases de GLP, informatizar el seguimiento de los envases a efectos de tener información sobre el estado, reparaciones, vencimiento y destrucción de los mismos.

La AGN informa que, a la fecha de cierre de las tareas de campo, no existen constancias de estudios de factibilidad efectuados para poner en marcha este sistema.

4. No existe razonable relación entre el costo del servicio prestado y la tasa recaudada para financiarlo. Durante el período auditado, sólo el 6,16% del total recaudado se destinó a la prestación del servicio.

La tasa constituye la compensación pecuniaria por la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible o de costo prorrateable, consecuentemente la determinación de su cuantía unitaria debe basarse no sólo en la capacidad contributiva del sujeto sino, además, que el monto total de lo recaudado por la tasa guarde una razonable y discreta relación con el costo total del servicio público efectivamente prestado.

De los datos suministrados por la Subsecretaría de Combustibles y los cálculos realizados por el equipo de auditoría, se informa que la recaudación total de la tasa para el período auditado asciende a la suma de \$24.943.002,44, lo cual supera considerablemente el costo del servicio (\$1.536.732,00), que sólo representa el 6,16% de la citada recaudación.

5. Parte de las sumas recaudadas en concepto de tasa de fiscalización y control de GLP son destinadas a aplicaciones diferentes de las previstas en la ley 26.020.

La ley 26.020, a través de los artículos 39 y 38, crea la tasa mencionada y asigna a la autoridad de aplicación su recaudación, respectivamente.

La Subsecretaría de Combustibles ha informado que del total de recursos hidrocarburíferos aprobados por la ley de presupuesto cada año, son destinados a la S.E., alrededor de un 20% para gastos y el resto (80%), son aprobados como créditos para aplicaciones financieras.

De las verificaciones realizadas por la AGN, se puede apreciar que los montos asignados a la subsecretaría resultan visiblemente inferiores al total recaudado en concepto de tasa.

Teniendo en cuenta que las sumas asignadas son destinadas no solo a GLP sino también, al resto de las áreas que integran la subsecretaría y que la diferencia de lo recaudado forma parte del presupuesto de la S.E., se puede aseverar que la tasa de fiscalización y control está solventando actividades, distintas de aquellas indicadas en la ley como causa de su contribución.

6. La Subsecretaría de Combustibles no cuenta con un programa presupuestario que organice sus acciones, como instrumento de programación económico y social, de administración y de gobierno, según lo dispone el *Manual del Sistema Presupuestario Público en la Administración Nacional de la República Argentina*.

Informa la AGN que la Secretaría de Energía posee un programa presupuestario, compuesto de varias actividades específicas, entre las cuales se identifica la denominada Ejecución de la Política de Hidrocarburos, cuya unidad ejecutoria es la Subsecretaría de Combustibles.

La estructura del presupuesto de gastos de la Subsecretaría se refleja a nivel actividad.

Las normas y principios presupuestarios indican que el presupuesto de gastos debe ser estructurado en base a categorías programáticas, y que cada uno de los programas debe describir la vinculación cualitativa y cuantitativa con las políticas nacionales a cuyos logros contribuyen (artículo 14.1, decreto 2.666/92).

Al no contar, la Subsecretaría de Combustibles con un programa presupuestario, no se permite evaluar el comportamiento de los costos (artículo 95, inciso b) del 2° párrafo de la ley 24.156), los resultados físicos y financieros obtenidos a fin de interpretar las variaciones respecto a lo programado (artículo 45, ley 24.156).

Asimismo la metodología de presentación de la información dificulta las tareas de auditoría y control, en tanto no permite identificar las actividades –en su consideración cualitativa y cuantitativa– a cargo de la subsecretaría en los términos del artículo 86, inciso c) de la ley 24.156.

7. Se verificaron deficiencias en el cumplimiento del convenio suscrito entre la Subsecretaría de Combustibles y la Universidad Nacional de General

San Martín que afectan su administración eficaz y razonable.

La Subsecretaría de Combustibles suscribió con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), el 15/12/03 un convenio marco con el fin de "...optimizar las capacidades institucionales de la subsecretaría en las áreas de su competencia mediante actividades de fortalecimiento, asistencia técnica y capacitación".

El objeto del contrato es implementar el Programa Nacional de Control de Estadística de Gas Licuado de Petróleo y se prohíbe que la UNSAM subcontrate el objeto principal del contrato.

De la documentación analizada surgen facturas a nombre de la UNSAM y cheques librados por el Polo Tecnológico Constituyente S.A. (PTC). Asimismo, se reporta entre los costos de administración del convenio un canon del 3% para el PTC y del 7% para la UNSAM.

El PTC (constituido por decreto 894/98), es una sociedad anónima integrada por la Universidad Nacional de General San Martín, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). Dicha sociedad tiene por objeto la prestación de servicios en el área de la investigación y desarrollo tecnológico, asesoría y capacitación, comercializar los resultados de las investigaciones propias, de sus socios o terceros, y facilitar la radicación y reconversión tecnológica de empresas en su zona de influencia. Este objeto es considerado como una extensión de los fines de los organismos públicos que la integran.

Si bien el PTC –empresa con participación estatal mayoritaria– está integrado por la UNSAM, esta sociedad no fue parte en el acuerdo suscrito entre la subsecretaría y la citada universidad.

El detalle de erogaciones efectuadas dentro del período auditado (abril/05 a abril/06), según datos de la Subsecretaría de Combustible, evidencia que las transferencias de dinero realizadas por la subsecretaría a la UNSAM no responden a gastos acreditados o presupuestados por la segunda, se trata de remesas de dinero que –con independencia de la rendición de los gastos que luego efectúa la UNSAM– se transfieren a ésta sin contraprestación o previsión actual.

8. Se financian mediante recursos propios de un convenio de asistencia técnica con una universidad, gastos por servicios y obras que no corresponden al objeto del convenio (cual es la asistencia y el asesoramiento técnico). La instrumentación de la compra de bienes de capital (como elementos informáticos), financiados con recursos del citado convenio requiere de actos administrativos de parte de la universidad

para incorporar los bienes adquiridos al patrimonio de la S.E.

El convenio suscrito entre la Subsecretaría de Combustibles y la UNSAM se define como un acuerdo de colaboración cuya finalidad es optimizar las capacidades institucionales de la subsecretaría en las áreas de su competencia, mediante actividades de fortalecimiento, asistencia técnica y capacitación. Las actividades se indican luego en un protocolo adicional denominado Contrato Específico de Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en el Marco del Acuerdo de Cooperación Institucional entre la Universidad Nacional de General San Martín y la Subsecretaría de Combustibles de la Nación.

Ese convenio se ejecuta a través del presupuesto de la S.E. mediante las partidas correspondientes al clasificador por objeto del gasto que corresponde a Servicios No Personales, Servicios Técnicos y Profesionales y Otros No Especificados Precedentemente.

Se comprenden en servicios técnicos y profesionales a los honorarios legales o convencionales a peritos profesionales universitarios, especialistas y técnicos sin relación de dependencia y los servicios de consultoría y asesoría prestados por terceros relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, sistemas computarizados, etcétera.

Mediante recursos del citado convenio se financian servicios u obras (caso de refacciones en oficinas: tareas de instalación eléctrica en obra, instalaciones de marmolería en *office* y baños, honorarios profesionales por proyecto y dirección de obra, etcétera) que no responden al objeto del convenio, cuyo espíritu es la asistencia y el asesoramiento técnico, ni a las normas de clasificación presupuestaria.

Respecto de bienes adquiridos –informáticos, equipos de aire acondicionado–, si bien consta en las autorizaciones de pagos que estos pasarán a formar parte del patrimonio de la S.E., se observa que el modo en que se instrumentaron las compras exigirá que la UNSAM transfiera luego los bienes al patrimonio de la S.E.

9. No existen constancias del título que autoriza a la DNGLP a ocupar el inmueble en el cual funcionan las oficinas de calle Paseo Colón 275, piso 12; no obstante ello se efectuaron mejoras en el inmueble que fueron solventadas con fondos de la tasa de fiscalización y control.

La DNGLP, dependiente de la Subsecretaría de Combustible, ocupa oficinas en el inmueble ubicado en Paseo Colón 275, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la documental analizada por la AGN, consta que dicho inmueble fue dado en locación al Polo Tecnológico Constituyente S.A. y los recibos por el pago del alquiler son extendidos a nombre de la UNSAM.

Se informa que, no obstante la precariedad de la ocupación, las oficinas fueron remodeladas, para ello se destinó la suma de \$504.471,90 (período 4/05 al

4/06), solventada con fondos provenientes de la tasa de fiscalización y control.

10. Los procedimientos aplicados por la delegación IV de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Producción, no cumplen con lo establecido en el artículo 20 de la resolución SE 1.073/05 ni con los regulados en la ley 24.156 y decretos reglamentarios.

En dicha oficina se contabiliza la totalidad de los recibos emitidos por el cobro de dicha tasa, así como también los correspondientes al cobro de accesorios (multas, intereses, etcétera).

De acuerdo a lo establecido por la resolución SE 1.073/05, la recaudación de la tasa de fiscalización y control de GLP, es percibida en la delegación IV de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Producción.

El depósito de los montos percibidos por estos conceptos se efectúa en la cuenta corriente recaudadora del Banco de la Nación Argentina, donde se deposita además de lo recaudado por la mencionada tasa, montos correspondientes a otros conceptos como ser regalías y canon, de combustibles líquidos, así como también multas por estos conceptos.

Si bien la oficina recaudadora emite información discriminando los tres conceptos: regalías, canon y GLP, en lo que respecta a multas, se utiliza la misma cuenta para los tres conceptos, no pudiendo identificar claramente a qué concepto debería imputarse la multa percibida.

Asimismo, se observó la existencia de recibos en los cuales se omite indicar el contribuyente y no indican claramente el concepto del pago percibido.

Se destaca a su vez, que la delegación IV de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Producción, no cumple con lo establecido en el artículo 20 de la resolución SE 1.073/05, la cual determina que la emisión de recibos oficiales debe efectuarse una vez acreditados los montos abonados en la respectiva cuenta recaudadora. Los recibos en cuestión son emitidos a la recepción de los valores, el dinero en efectivo, o en su defecto, en el momento que se detectan depósitos o transferencias en cuenta recaudadora.

En lo que respecta a los importes cobrados en efectivo se consigna que se detectaron demoras en sus correspondientes depósitos.

Los depósitos de los importes cobrados en efectivo, conforme los determina el artículo 3°, apartado b) del decreto 2.629/92, reglamentario del artículo 78 de la ley 24.156 deben efectuarse dentro de las 24 horas. No obstante la demora incurrida por la oficina recaudadora, promedia los 8 días hábiles. Las deficiencias mencionadas dificultan el seguimiento y control de los montos ingresados.

11. La información relativa a la recaudación de la tasa de fiscalización y control que posee la S.E.

(Unidad Sociedades, Auditorías e Impuestos dependiente de la Dirección General de Cooperación y Asistencia Financiera) no se ajusta a la reportada por el Ministerio de Economía y Producción (delegación IV de la Dirección General de Administración) lo cual revela una inadecuada comunicación entre las áreas.

El Ministerio de Economía y Producción (delegación IV de la Dirección General de Administración) informa una recaudación de \$ 16.043.073,16, mientras que la Unidad Sociedades, Auditoría e Impuestos de la S.E. declara ingresos por \$ 12.058.492,93.

Asimismo, se ha verificado la falta de coincidencia entre el total de comprobantes de pagos informados por la delegación IV y los registrados por la Unidad Sociedades, Auditoría e Impuestos.

Existe una estrecha relación entre las dependencias mencionadas, dado que la resolución S.E. 1.073/05 (artículo 13) le confiere a la Unidad Sociedades, Auditorías e Impuestos de la S.E. el control del cobro de la tasa de fiscalización y control, debido a que los sujetos pasivos obligados al pago deben presentar ante ella los formularios de determinación del impuesto devengado a pagar así como también –de corresponder– el de determinación de accesorios a pagar, por lo cual esta unidad informa a la delegación IV los montos a percibir, quedando sobreentendido que debe realizar las correspondientes conciliaciones entre los montos ingresados y la documentación que obra en su poder.

12. La S.E. permite que los operadores del sistema desarrollen su actividad sin haber cumplimentado la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución 800/04. Tampoco ha otorgado, durante el período auditado ni con anterioridad a él, comprobante o certificado de habilitación a los operadores que cumplieron los requisitos exigidos.

La resolución S.E. 800/0414 otorgó, a los operadores registrados o con trámite de inscripción iniciado ante el Registro Nacional de la Industria del GLP, un plazo de 30 días corridos, contados a partir de la publicación (2/8/2004), a efectos de adecuar la documentación presentada originalmente a los requisitos ahora dispuestos. En caso de incumplimiento se procede a su suspensión y/o eliminación del registro y al archivo de la documentación presentada. Las personas que se encuentren operando y que al vencimiento del plazo previsto, no cumplieron los requisitos exigidos en tiempo y forma para su registración, serán consideradas clandestinas.

Además, estipula que los cambios en los datos y constancias existentes en el legajo de cada inscrito deben ser informados a la Subsecretaría de Combustibles, dentro de los 30 días de producidos (artículo 6° de la resolución S.E. 800/04).

La norma, asimismo, determina quiénes pueden inscribirse como operadores; los requisitos generales, de cumplimiento obligatorio para todos los operadores

de la industria y, los especiales para cada uno de los sujetos del sistema (seguros, auditorías de seguridad, balance, etcétera).

Del análisis de los expedientes seleccionados por la AGN se observó incumplimiento a la normativa en mención.

13. En el 11 % de los expedientes donde consta la aplicación de una sanción, no obra el pago de la multa respectiva ni de las acciones de la Subsecretaría de Combustibles ante dicho incumplimiento (numeral 7.10 del capítulo 2, Aplicación de penalidades de la resolución S.E. 154/95).

La AGN informa que de las 131 razones sociales determinadas como muestra, 48 de ellas fueron inspeccionadas dentro del período auditado, es decir un 36,64 %, dando origen a la apertura de un expediente.

De los 157 expedientes analizados por fraccionadores y/o almacenadores, el 35,67 % evidenciaron incumplimientos a la normativa vigente y dieron origen a la aplicación de una sanción. De éstos, en el 11 % no consta el pago de la multa impuesta por la Subsecretaría de Combustibles, a su vez ésta no cumple lo establecido en el numeral 7.10 del capítulo 2 –Aplicación de penalidades de la resolución S.E. 154/95–, toda vez que, vencido el término para hacer efectiva la multa impuesta, no intima al operador ni procede a su suspensión y, en el 9 % no obra la constancia de pago en el expediente respectivo, sino en otro expediente, iniciado por otra acta de inspección.

Lo expresado precedentemente dificulta el seguimiento de los pagos efectuados por las empresas sancionadas.

Respecto del plan de inspecciones programadas remitido por el auditado, no consta su fecha de confección, ni la aprobación del mismo, pudiendo por sus características asimilarse dicho documento a un detalle de las inspecciones efectivamente ejecutadas.

14. Resulta excesivo el lapso transcurrido (promedio de 95 días hábiles) desde la suscripción del acta de inspección hasta el dictado de la resolución correspondiente, por parte de la Subsecretaría de Combustibles.

La resolución S.E. 154/95 estipula en el artículo 7.6 un plazo de 15 días hábiles para que la firma practique su descargo y ofrezca las pruebas pertinentes; vencido ese plazo se le dará por decaído el derecho dictándose de inmediato la resolución correspondiente.

No obstante lo dispuesto, se ha observado que desde la fecha en que se labró el acta de inspección hasta la fecha de la resolución, transcurre un promedio de 95 días hábiles.

15. La DNGLP no efectúa el seguimiento oportuno de las deficiencias detectadas en las inspecciones, a fin de verificar su corrección. Asimismo, no se constató el cumplimiento, por parte de los fraccionadores, de la obligación de exhibir precios como tampoco la calidad del producto envasado.

Como resultado de las 20 inspecciones presenciadas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Córdoba, se verificó que —a fin de regularizar las deficiencias detalladas en las actas labradas— tanto en el ítem “Notas” como las tipificadas con el numeral 7.14 de la resolución S.E. 154/95— se otorga un plazo comprendido entre 5 y 10 días. Mas no se verifica al vencimiento del plazo otorgado, su corrección toda vez que entre una inspección y otra transcurren de 6 meses a 1 año, aproximadamente.

Asimismo, no se verificó que se exhibieran los precios (artículo 13, ley 26.020) ni la calidad del producto envasado (inciso *n*), artículo 37, de la ley 26.020).

16. El 77% de las multas impuestas por infracciones a los precios de referencia, permanecen impagas. A su vez, se registran demoras en la tramitación de los expedientes labrados (en violación a lo dispuesto en el inciso *b*) del artículo 1° de la Ley de Procedimientos Administrativos).

Se informa que de los 86 expedientes iniciados por inspecciones realizadas para el control de los precios de referencia se detectaron demoras en su trámite.

Se registraron 40 casos con una demora promedio de 55 días hábiles, contados desde la fecha de la inspección hasta su ingreso al sistema, por parte del sector mesa de entradas y 76 casos con una demora promedio de 103 días hábiles contados desde la fecha de apertura del expediente hasta el dictado de la resolución sancionatoria y de 26 días hábiles contados desde el dictado de la resolución sancionatoria hasta su respectiva notificación.

En el 77% de los expedientes (66 casos) relevados permanecen impagas las multas impuestas, sin que se haya instado su cobro.

17. La S.E. no verifica el ejercicio del poder sancionatorio delegado a las provincias, en razón de no haber exigido la presentación de los informes trimestrales, dispuestos en el Acta Acuerdo de Delegación de Facultades a las Autoridades Provinciales de Defensa del Consumidor para el Control de los Precios de Referencia del Sector de GLP.

Las provincias adheridas al régimen de contralor (Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe) deben confeccionar informes trimestrales sobre las actividades de fiscalización desarrolladas y los resultados arrojados, los cuales deben ser remitidos a la Subsecretaría de Combustibles para su consideración (artículo 1° —último párrafo— del acta acuerdo).

Como conclusión de lo precedentemente expuesto, la AGN concluye que la ley 26.020 de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo regula actividades declaradas de interés público y tuvo por objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico del gas a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.

La falta de reglamentación torna inoperativos aspectos relevantes de la misma, tales como el sancionatorio, el sistema de acceso abierto para la actividad de almacenaje que procuraba la mejor operación de la industria mediante el libre acceso a terceros al mercado en un marco de igualdad de oportunidades; y la contratación de seguros obligatorios para cada etapa de la comercialización.

La ley creó además un fondo fiduciario para asegurar a usuarios de bajos recursos el suministro de gas y la expansión del servicio a zonas no cubiertas por redes de gas natural, el que no ha sido implementado.

Se destaca que este hidrocarburo es demandado por los sectores de menores ingresos y que en el caso de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco están íntegramente no servidas por redes de gas natural.

La S.E. no ha alcanzado la totalidad de las metas propuestas en el Plan de Gestión 2005 en el contexto de la ley 26.020. De este modo no se han implementado los centros de atención de reclamos de los usuarios; existen 12 jurisdicciones con las que no se ha acordado políticas de contralor para el seguimiento de los precios de referencia.

No existe razonable relación entre el costo del servicio prestado y la tasa de fiscalización y control (creada por la ley 26.020) recaudada para financiarlo ya que durante el período auditado, sólo el 6,16 % del total recaudado se destinó a la prestación del servicio. Si bien la tasa se presupuesta como recurso con aplicación específica, parte de las sumas recaudadas se destinan a aplicaciones diferentes de las previstas en la ley 26.020, lo cual se opone al artículo 23 de la ley 24.156.

La Subsecretaría de Combustibles no cuenta con un programa presupuestario que organice sus acciones, según lo dispone el *Manual del sistema presupuestario público en la administración nacional de la República Argentina*.

La Subsecretaría de Combustibles suscribió acuerdos con la UNSAM con el fin de optimizar las capacidades institucionales de la subsecretaría mediante actividades de fortalecimiento, asistencia técnica y capacitación. Se encomendó a la universidad el servicio de asesoramiento en la implementación del Programa Nacional de Control de Estadística de GLP.

Si bien las partidas mediante las cuales la S.E. ejecuta el convenio corresponden al clasificador presupuestario por objeto del gasto referido a servicios técnicos y profesionales, se financiaron mediante recursos propios de este convenio de asistencia técnica, gastos por servicios y obras que no corresponden al objeto del contrato, de este modo la ejecución no responde al criterio del clasificador presupuestario y no permite el registro y acceso al sistema de información relativo al proceso de recursos y gastos de la actividad.

No obstante el citado convenio prohibió la subcontratación de su objeto, el Polo Tecnológico Constituyente S.A. percibe el 3 % del costo de adminis-

tración del convenio (que asciende al 10%). Dichos costos (\$ 593.413) resultan desproporcionados si se comparan con los gastos derivados de las inspecciones practicadas en el período auditado (\$ 257.344,00, suma integrada por los rubros alquiler de vehículos, pasajes e inspecciones en el interior).

La Subsecretaría de Combustibles se hizo cargo de gastos bancarios por \$ 97.931,00, que no se habrían generado de no haber intervenido la citada sociedad; en efecto la UNSAM no se encuentra alcanzada por el impuesto a los débitos y créditos bancarios (artículo 2° de la ley 25.413).

La operatoria del convenio se concretó mediante remesas de dinero realizadas por la subsecretaría a la UNSAM que —con independencia de la rendición de los gastos que luego efectúa la misma— se transfieren sin contraprestación o previsión actual. Asimismo el saldo no utilizado es significativo, representando el 55,18% del total transferido.

Los procedimientos aplicados por la delegación IV de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Producción, no cumplen con lo establecido en el artículo 20 de la resolución S.E. 1.073/05 ni con los regulados en la ley 24.156 y decretos reglamentarios. La tasa recaudada es depositada en una cuenta junto a otros conceptos como: regalías, canon y multas, no pudiendo identificarse a cuáles de los conceptos se imputa la multa percibida.

Se incumple el artículo 20 de la resolución S.E. 1.073/05, por cuanto los recibos oficiales se emiten a la recepción de los valores (el dinero en efectivo, o en el momento que se detectan depósitos o transferencias en cuenta recaudadora) antes de que resulten acreditados en la cuenta recaudadora.

Asimismo, se detectaron demoras en los depósitos que promedian, para el caso de cobros en efectivo, los 8 días hábiles, cuando la norma (el artículo 3°, apartado b) del decreto 2.629/92) exige que se efectúen dentro de las 24 horas.

Las sumas que se informan como recaudadas en concepto de tasa por la Unidad Sociedades, Auditorías e Impuestos dependiente de la Dirección General de Cooperación y Asistencia Financiera de la SE y la delegación IV de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Producción no

coinciden, como tampoco el número de comprobantes de pagos reportados por la delegación IV y los registrados por la Unidad Sociedades, Auditoría e Impuestos. Siendo que la delegación IV es quien percibe la tasa y la Unidad Sociedades, Auditorías e Impuestos de la SE tiene a su cargo el control del cobro de la misma, debería existir una adecuada comunicación entre las áreas que les permitiera conciliar la información.

La SE permite que los operadores del sistema desarrollen su actividad sin haber cumplimentado la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución 800/04.

Tampoco ha otorgado, durante el período auditado ni con anterioridad a él, comprobante o certificado de habilitación a los operadores que cumplimentaron los requisitos exigidos. De este modo, de las 131 razones sociales relevadas, al 95,42% la S.E. no les entregó certificado autorizando la actividad. De las 210 actividades comprendidas en las 131 razones sociales relevadas, el 75,24% de ellas tenía vencido el seguro de responsabilidad civil, contra incendios y explosiones exigido por las normas.

Respecto del pago de las multas, en el 11% de los expedientes de la muestra, donde consta la aplicación de una sanción, no obra el pago de la multa, ni constan las acciones de la Subsecretaría de Combustibles ante dicho incumplimiento.

Se verificaron excesivas demoras desde el labrado del acta de inspección hasta el dictado de la resolución correspondiente por parte de la Subsecretaría de Combustibles. En el trámite de expedientes por infracciones a los precios de referencia se registraron demoras que promedian —en el 88% de los casos de la muestra— los 103 días hábiles desde la fecha de apertura del expediente hasta el dictado de la resolución sancionatoria. Asimismo, en el 77% de los expedientes relevados permanecen impagas las multas impuestas, sin que se haya instado su cobro.

Heriberto A. Martínez Oddone. — Luis A. Juez. — Gerardo R. Morales. — Ernesto R. Sanz. — Juan C. Morán. — Walter A. Agosto.

ANTECEDENTES

Ver expedientes 8.674-D.-2010 y 5-O.V.-2008.